

las decisiones, ni mecanismos para proteger a los jueces (jeques) de las represalias de las partes agraviadas que pierden una disputa. Las buenas relaciones entre vecinos se consideran una necesidad de supervivencia. Hoy en día, sus habitantes siguen viviendo en los mismos pueblos cerrados (organizados en gran medida según las mismas estructuras de poder) dentro de la vastedad de los campos de desplazados. Sus tradiciones siguen prevaleciendo.

Los resultados de las mediaciones tradicionales quizá respeten a corto plazo el interés por mantener la paz en los pueblos y campos de desplazados

que se encuentran aislados y donde escasean los recursos, incluso si suponen una gran injusticia para las personas, pero la perspectiva bifocal de los pasantes constituye una respuesta responsable, centrada en el cliente y sensible desde el punto de vista cultural, que permite superar los resultados perjudiciales de la justicia tradicional.

El éxito de esta primera fase del programa, llevada a cabo en medio de una emergencia humanitaria, demuestra que nunca es demasiado pronto para atender la necesidad de promover el estado de derecho y respetar los derechos

humanos, y que es posible hacerlo incluso mientras se lucha por la supervivencia.

Maarten Barends (maarten.barends@undp.org) trabaja para el Programa para el Estado de Derecho en Darfur del PNUD (www.sd.undp.org/projects/dg8.htm).

El presente artículo ha sido escrito a título personal y no refleja necesariamente las opiniones de Naciones Unidas ni de ninguna otra organización. Los nombres de las personas mencionadas han sido modificados para proteger su intimidad.

1. "Jeque" significa "mayor" en árabe y normalmente se utiliza para designar a una persona de edad avanzada dentro de una tribu: un jefe, un sabio venerado o un estudioso del Islam.

Trata de personas: más allá del Protocolo

Sergei Martynov

En febrero de 2008, el Foro de Viena, un gran encuentro global sobre la trata de persona, logró captar gran atención internacional y recibió críticas positivas en todo el mundo.

El Foro de Viena¹ no finalizó con declaraciones, planes ni promesas concretos, como suele ser el caso en este tipo de acontecimientos. Tan sólo reunió a unos 2.000 representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil y sector privado, así como a personalidades renombradas. La mayor aportación del Foro reside en el hecho de que desveló al mundo una amarga realidad de nuestra época contemporánea: la esclavitud sigue existiendo y va en aumento².

Prohibida por la ley, la trata de personas es una actividad envuelta en una niebla demasiado densa. Cada año caen, víctimas de ella, cientos de miles de personas en todo el mundo, incapaces de liberarse de una situación de explotación. Los delincuentes trabajan en redes organizadas y tratan a sus víctimas como mercancía que pueden intercambiar por dinero.

Se cree que la trata de personas es la tercera actividad ilícita más lucrativa, tras la venta ilegal de armas y droga. No obstante, precisamente debido a su naturaleza oculta, la trata de personas no se ajusta a un análisis simple ni permite establecer estimaciones certeras sobre sus cifras. Los cálculos sobre el número

total de víctimas de la trata de personas oscilan entre las 800.000 y los más de 2,4 millones³, y se estima que los beneficios de los traficantes alcanzan los 32.000 millones de dólares estadounidenses.⁴

Se cree que las mujeres y niñas conforman aproximadamente el 80 % del total de víctimas de la trata. Especial atención merecen los menores que caen en manos de los traficantes. UNICEF calcula que se trafica con 1.200.000 niños y niñas al año. Hasta ahora, la principal preocupación de la opinión pública ha sido la trata cuyo fin es la explotación sexual. Sin embargo, parece que cada vez se extiende más la opinión de dar preferencia en la agenda política a la trata con fines de explotación laboral, ante otras cuestiones.

¿Un nuevo paradigma?

El mundo no puede seguir moviéndose por inercia. Las desigualdades mundiales seguirán existiendo, con toda seguridad. Estos desequilibrios no dejarán de impulsar, a su vez, los flujos migratorios. Las sociedades industrializadas deben reconocer que dependen en gran medida de la mano de obra extranjera para mantener sus actividades económicas. Los gobiernos tienen poder para cambiar el funcionamiento del mercado global

y reducir, así, los factores de huida en la vinculación entre trata y migración. Además, pueden estudiar cómo mejorar la regulación de la inmigración para de esta forma reducir el efecto llamada.

Existen dos errores importantes en la perspectiva internacional actual contra la trata. El primero, la ausencia de un marco institucional general, representado hoy en día por el Protocolo contra la Trata y su atención exclusiva a la seguridad. Y el segundo, la ausencia de una estructura institucionalizada para la cooperación internacional contra la trata de personas.

El nuevo paradigma debería partir del reconocimiento de que las víctimas de la trata no sólo han caído en manos de los traficantes, sino que también se han visto atrapadas en el orden económico global y en los contextos sociales prevalecientes. Por tanto, la respuesta mundial a la trata debería incluir políticas que abarquen las tres "p": prevención, persecución y protección. También debería centrarse en las dos caras de la moneda: tanto en la demanda, como en la oferta de personas. Y, por último, debería afrontar la explotación sexual y laboral.

El nuevo paradigma también exige una estructura internacional que garantice la cooperación y coordinación eficaces entre las partes interesadas y las diversas iniciativas contra la trata de

personas. Con demasiada frecuencia, el esfuerzo de decenas de organizaciones internacionales intergubernamentales y de cientos de ONG que trabajan contra la trata de personas se encuentran fragmentados, están descoordinados y no se canalizan hacia objetivos mutuos.

En julio de 2008, a propuesta de Bielorrusia, el ECOSOC adoptó una resolución sobre la necesidad de crear un plan global de acción contra la trata de personas. Dentro del 63º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2008, Bielorrusia patrocinó por segunda vez (siendo la primera en 2006) un proyecto de resolución para mejorar la coordinación de las labores contra la trata de personas.⁵ El objetivo principal de dicha resolución era decidir el mejor sistema para formular una estrategia global contra la trata. El impulso para conseguirlo es cada vez mayor.

En términos prácticos, podría asignarse la función de coordinador global al Grupo Interinstitucional de coordinación contra la trata de seres humanos (ICAT, por sus siglas en inglés), que se estableció para facilitar la coordinación de las diversas tareas internacionales y regionales.

Lo que se precisa ahora es un interés renovado por parte de sus miembros y el apoyo político de todos los países.

Es hora de adoptar las decisiones procedimentales necesarias en el seno de las Naciones Unidas. Lo más importante, sin embargo, es que la fase actual de actividades contra la trata (en cuya puesta en marcha fueron decisivos el Foro de Viena y la Iniciativa Mundial de las Naciones Unidas para Luchar contra la Trata de Personas (UN.GIFT)⁶) culmine en una sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre este tema. Esta sesión podría dar como resultado una estrategia o un Plan Global de Acción de Naciones Unidas contra la trata y una declaración política sobre la cuestión. A largo plazo, no se puede poner en práctica ninguna iniciativa sin el firme compromiso y el sólido apoyo político de los estados miembros de Naciones Unidas. Y es responsabilidad de estos estados adoptar un nuevo paradigma general a largo plazo sobre la trata que ayude a mejorar nuestros planes comunes para erradicar esta forma moderna de esclavitud.



OIM 2003/MGH0002/Jean-Philippe Chazuy

Serguéi Martynov es el Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Bielorrusia. ara obtener más información, contacte con unmission@byembassy.at

Niños víctimas de la trata sacan redes bajo la supervisión de un patrón esclavo en el lago Volta (Ghana).

1. Organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
2. Para obtener más información sobre la trata de personas véase RMF 25 Trata de humanos: defendiendo derechos y comprendiendo vulnerabilidades, disponible en línea en www.migracionesforzadas.org/pdf/RMF25/RMF25.pdf
3. Véase www.antislavery.org/homepage/antislavery/trafficking.htm
4. Cita procedente de Cómo mejorar la lucha global para acabar con la trata de personas ('Enhancing the Global Fight to End Human Trafficking'), Audiencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos del 26 de septiembre de 2006, n.º de serie 109-232, p. 11.
5. Asociación Mundial contra la Esclavitud y la Trata de Personas
6. www.ungift.org

La atención del VIH/SIDA para los refugiados en Egipto

Anna Popinchalk

El acceso a la atención médica de los refugiados seropositivos en Egipto se ve obstaculizado por la carencia de este tipo de servicios y por el fuerte estigma y discriminación asociados al virus y a la enfermedad.

Aunque no existen datos que corroboren la afirmación de que el VIH incide en mayor medida entre la población refugiada, sí es cierto que ésta ha estado siempre más expuesta al virus debido a la inestabilidad social, la pérdida de sus familiares y de aquellos que suponían el soporte económico, su mayor indefensión ante las agresiones sexuales y su mayor participación en el comercio sexual, así como por la falta de recursos y servicios educativos y sanitarios.

Antes de la década de los noventa, la atención no se centraba en los riesgos del VIH/SIDA entre la población refugiada

por miedo a que, si se subrayaba este problema, los gobiernos se resistieran a acoger a los refugiados. A medida que los países empezaron a considerar la necesidad de hacer la prueba del VIH a los refugiados antes de permitirles viajar y reasentarse en otra nación, ACNUR empezó a defenderles ante la expulsión a causa de su infección, mediante la publicación de sus Orientaciones Públicas sobre la Protección y Ayuda a los Refugiados y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).¹ Desde entonces, ACNUR ha seguido publicando directrices y planes estratégicos que defienden los derechos

de los refugiados con respecto al VIH y el SIDA, y ha abogado por que estas pruebas dejen de ser obligatorias.

Según la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, los países de acogida deben ofrecer a los refugiados la misma asistencia social y médica que dispensan a sus ciudadanos sin discriminación alguna. No obstante, muchos países, ya sobrecargados por el VIH/SIDA entre su propia población, no suelen ofrecer servicios adicionales a los refugiados y raramente les incluyen en sus políticas nacionales contra la enfermedad.

Estigmatización e ideas equivocadas

En marzo de 2007 había unos 39.400 refugiados y personas bajo la competencia